

CAUSA	ROL C-1654-2020	
MATERIA	COBRO DE PAGARÉ	Código C07A
PROCEDIMIENTO	JUICIO EJECUTIVO OBLIGACIÓN DE DAR	
DEMANDANTE	BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A.	RUT: 90.286.000-2
ABOGADO	MAY CONZUELO GUTIÉRREZ OTTO	C.I.: 13.831.554-1
DEMANDADO	CLAUDIA AMÉRICA JORQUERA TAPIA	C.I. 12.544.386-9
ABOGADO	MANUEL GUSTAVOVALDÉS VÁSQUEZ	C.I. 8.435.461-9
FECHA DE INGRESO	02 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA CÍTESE	03 DE DICIEMBRE DE 2021	

Linares veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

PRIMERO: que, a folio 1, con fecha 02 de octubre de 2020, comparece doña MAY GUTIÉRREZ OTTO, abogada, cédula nacional de identidad N° 13.831.554-1, en representación judicial de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A.**, sociedad del giro de su denominación, RUT 90.286.000-2, representada legalmente por doña Bernardita Sáez Rozas, abogada, cédula nacional de identidad N° 9.358.608-5, todos domiciliados para estos efectos en Compañía de Jesús N° 1390, oficina 1109, comuna de Santiago, quien respetuosamente dice:

Que viene en deducir demanda en juicio ejecutivo por obligación de dar por la suma de \$4.884.621.- (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), en contra de doña **CLAUDIA AMÉRICA JORQUERA TAPIA**, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° 12.544.386-9 domiciliada en PARCELA 19 SAN RAUL, LONGAVI, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



Señala que doña CLAUDIA AMERICA JORQUERA TAPIA, ya individualizada, suscribió con fecha 30 de junio de 2017 pagaré N°007689, a la orden de BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. por un monto total de \$4.884.621.- (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), el que se obligó a pagar en una única cuota el día 31 de julio de 2020.

En el pagaré se pactó además que en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas en que se ha dividido el cumplimiento de la obligación, el acreedor podría hacer exigible el saldo total adeudado, como si este fuere de plazo vencido. En igual caso, y desde la fecha de la mora o simple retardo hasta la fecha del pago total y efectivo, la obligación devengaría un interés moratorio igual al máximo convencional que la ley permita estipular para este tipo de operaciones.

Asimismo, se estipuló que todas las obligaciones derivadas del pagaré serían consideradas indivisibles para el suscriptor, sus herederos y/o sucesores, para todos los efectos legales y en especial aquellos contemplados en los artículos 1526 N°4 y 1528 del Código Civil.

Es del caso señalar que, llegada la fecha del pago, el deudor no pagó, en consecuencia, el demandado se encuentra constituido en mora desde el día 31 de julio de 2020, adeudándose en la actualidad la suma total de \$4.884.621.- (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), más intereses y costas.

Para todos los efectos se fija domicilio para interponer las acciones que emanen del pagaré los tribunales que correspondan al domicilio del deudor, a elección de BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A.

Por lo anterior y considerándose además que la firma del deudor se encuentra debidamente autorizada ante Notario Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, es que el pagaré tiene mérito ejecutivo respecto al obligado a su pago. Y

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



siendo la deuda líquida, actualmente exigible y no estando prescrita la acción ejecutiva para su cobro, su representada viene en hacer efectivo su derecho, demandando el pago íntegro del crédito con costas.

En mérito de lo expuesto, documentos acompañados y lo dispuesto en el artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales pertinentes, solicita tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva en contra de doña CLAUDIA AMÉRICA JORQUERA TAPIA, ya individualizada, ordenando se despache en su contra mandamiento de ejecución y embargo por un total de \$4.884.621.- (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), más los intereses convenidos, declarando en definitiva que se debe continuar adelante con la ejecución hasta hacer a su representado entero y cumplido pago del total de lo adeudado, con costas.

SEGUNDO: Excepciones: que, a folio 13, con fecha 20 de abril de 2021, comparece don Manuel G. Valdés Vásquez, abogado, en representación convencional-según consta en el mérito de autos- de doña Claudia América Jorquera Tapia, labores de casa, domiciliada en sector San Raúl, Parcela N° 19, comuna de Longaví, demandada, en los autos ejecutivos caratulados “British American Tobacco Chile Operaciones S.A. con Jorquera Tapia, Claudia América”, rol C-1654-2020, cuaderno principal, quien respetuosamente dice:

Que en la oportunidad legal viene en oponer excepciones a la ejecución, solicitando desde ya sean acogidas una en subsidio de la otra, y subsecuentemente se desestime la demanda de autos, con costas.

Antecedentes.

Señala que la sociedad British American Tobacco Chile Operaciones S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por doña Bernardita Sáez Rozas, ambos domiciliados para estos efectos en calle Compañía de Jesús N° 1390, oficina 1109, comuna de Santiago,

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



ha interpuesto demanda ejecutiva en contra de su mandante doña Claudia América Jorquera Tapia por la suma de \$4.884.621, más intereses y costas; al efecto pide se despache mandamiento de ejecución y embargo, designación de depositario provisional, y se disponga seguir adelante con la ejecución hasta obtener el entero e íntegro pago de la indicada suma, con costas.

Excepciones a la ejecución.

1.-La excepción de nulidad de la obligación. Artículo 464 N° 14 del Código de Procedimiento Civil.

Como antesala, es menester precisar que entre la demandante y su mandante en autos, la demandada, no ha existido solamente una operación comercial aislada, sino que esta viene dándose en el tiempo por ya a lo menos 3 años; en los cuales la empresa actora financiaba los actos completos de la siembra de tabaco burley en su propiedad en una extensión de aproximadamente 2 hectáreas, la que después se redujo a 1. En tal caso, se abonó en la cuenta RUT del Banco Estado valores para el pago de preparación de suelos y mano de obra. Posteriormente traían la semilla supervisada por técnicos de la especialidad, los que dicho sea de paso, no siempre eran rigurosos en la periodicidad de sus visitas y por ende el éxito de la siembra no siempre resultó de excelencia; la excusa usual era que había muchos otros agricultores con contratos, razón por la cual no podían dar abasto con la calendarización de visitas y reforzamiento de información y conocimiento a quienes sembraban.

Indica que la planta a la época de cosecha se corta y se cuelga en los toriles aproximadamente 3 meses y luego se deshoja y se enfarda selectivamente. En la medida que se entregan los fardos a camiones de la empresa, se factura. Luego se hacen los alcances entre lo que se recibió para producir con lo que se cosechó. La diferencia es la utilidad que le queda al agricultor. Pero como se puede apreciar



siempre es necesario un cotejo, o sea, una contra partida entre lo que se recibe y lo que gana, comúnmente llamado “liquidación”. Es decir, se hace necesario una convención que arroje un resultado que deje a ambos satisfechos con las cifras. En la especie, sostiene que la actora hizo una liquidación arbitraria, no convencional, la que plasmó unilateralmente en el pagaré que cobra en autos, que como se advierte, la suscriptora jamás llenó en cuanto a su contenido, simplemente firmó en blanco el pagaré en su domicilio ubicado en la comuna de Longaví, y ello porque esa es la modalidad de la empresa, o sea, se está frente a un contrato tipo o dirigido en el cual el agricultor no tiene ninguna injerencia en su redacción ni en concatenación de actos administrativos siguientes, y por ende, en las obligaciones que a la postre se le imponen. Puede observarse que el pagaré está autorizado ante Notario, es decir, no se firmó ante Notario, y ello es veraz porque su mandante afirma que nunca estuvo en esa Notaría en la fecha que se indica. En buenas cuentas, el Notario simplemente testimonia que se le ha llevado un documento con la firma ilegible y el estampado dígito pulgar de un aceptante que no ha visto jamás y menos que ha oído o se ha informado por algún medio que ese pagaré es el resultado de algún negocio o acto jurídico.

Afirma que entre las partes ha existido una negociación típicamente comercial y agrícola con pagos y anticipos parciales y pendientes reconocidos en algunos e impugnados en otros, de modo que el pagaré no ha sido sino un elemento accesorio circunstancial de la obligación principal que subyace en el negocio jurídico que ha vinculado a las partes a la hora de iniciarse la gestión de notificación y por ende del presente juicio; de allí que aparece nítido e indispensable para precisar el monto de la obligación la existencia previa de un juicio declarativo con la finalidad de establecer con exactitud los derechos y obligaciones recíprocas de las partes, razón



por la cual el pagaré de autos, no tiene la virtud de servir de título, ni fundamento al presente juicio ejecutivo. Al no haber existido en autos una sentencia declarativa que permita establecer que la obligación que representa el pagaré, por no constituir un solo acto, sino la consecuencia de muchos actos periódicos y diversos en cuanto al momento como en cuanto a la veracidad de los derechos en favor del acreedor en contra del supuesto deudor, no puede atribuírsele que tiene mérito ejecutivo para dar inicio al procedimiento de ejecución. Resulta en consecuencia, que en los términos actuales, es nula la obligación que se pretende cobrar en autos.

Se ha dicho que es obligación del Juez, en cada caso particular, desentrañar las peculiaridades del título cuando se trata de un juicio de naturaleza ejecutiva, y en especial, las circunstancias de hecho, comerciales y de toda naturaleza que haya dado motivo u origen al título y la finalidad que con la suscripción del pagaré o factura se haya pretendido tanto por el acreedor como por el deudor. El Juez no puede limitarse a la simple constatación de los aspectos formales del título, sea pagaré, letra de cambio, factura, a la sola luz de los artículos 102 de la ley 18.092 o ley 19.983, sino que ha de detenerse necesariamente en la contemplación reflexiva del negocio jurídico existente entre las partes ya desde antes de la suscripción del documento. Que, la necesidad de esclarecimiento que se alega, tiene también su soporte en diversas disposiciones legales contenidas en el Código de Procedimiento Civil el que es pródigo en proporcionar otros antecedentes o presupuestos jurídicos se debe necesariamente tener en consideración a fin de resolver adecuadamente la controversia de autos. Así, por ejemplo, en su artículo 437 señala que para que proceda la ejecución "se requiere que la obligación sea actualmente exigible". Luego, al indicar los objetos sobre los que puede recaer la ejecución, trata en su artículo 438 "de la especie o



cuerpo cierto que se deba", de la "cantidad líquida de dinero o de un género determinado" y de su "avaluación", y de las "operaciones aritméticas" que se emplearán en la determinación de las cantidades "líquida" y de aquellas "que puede liquidarse".

En su artículo 439 trata el caso de existir una obligación "en parte líquida e ilíquida en otra", y de la reserva, del acreedor, de "su derecho para reclamar el resto en vía ordinaria". Finalmente, y refiriéndose siempre a "la avaluación" y a la determinación del "monto de la ejecución", alude también al derecho de las partes "para pedir que se aumenta o disminuya". Corolario de todo lo anterior es que se deberá acoger la presente excepción toda vez que el pagaré llenado unilateralmente y sin mandato no cumple en la especie con los requisitos para constituir título ejecutivo puesto que la obligación allí contenida es nula, debiendo por ende desestimarse la demanda de autos, con expresa condenación en costas. Que en circunstancias similares así lo ha resuelto la jurisprudencia, como se hará constar en autos para efectos vivendi.

Sostiene, como se ha indicado en el párrafo anterior, que resulta aplicable por analogía lo que indica el artículo 438 número 3, que dispone que la ejecución puede recaer sobre una cantidad líquida, que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solamente los datos que el mismo título ejecutivo suministre; a contrario sensu, de no ser posible, será preciso, efectuar una liquidación previa y mediante procedimiento declarativo determinar, de existir, el monto de la obligación dineraria.

2.- Excepción de esperas y prórrogas. Artículo 464 N° 11 del Código de Procedimiento Civil.

En armonía con la excepción opuesta en el numeral 1, referido a la nulidad de la obligación; ante los insistentes reclamos que vertió su mandante en contra de la liquidación unilateral e



inconsulta que realizó la empresa actora de autos, se le informó que no se realizaría la cobranza del pagaré de autos, sino por el contrario, luego de un prolijo estudio de los antecedentes y revisión de los activos y pasivos de la relación comercial, se decidiría de consuno el valor adeudado, en el caso de existir. En consideración a ello, se le indicó que habría esperas y prórrogas con tal finalidad. Por ello, mayúscula ha sido la sorpresa para la demandada de ser notificada de la demanda de autos, que atribuye, sin dudas, a una falta de comunicación expedita en el nivel administrativo de la actora, pues enfáticamente se le señaló que la situación se resolvería antes del segundo semestre del presente año, y como se advierte de los antecedentes de autos, se procedió antes, es decir, contrariando la concesión de esperas y prórrogas convencionalmente acordadas hasta la dilucidación del monto del crédito exacto y no antojadizo que expresa el pagaré.

Solicita tener por opuestas las excepciones descritas a la ejecución, una en subsidio de la otra; declararlas admisibles, y en sentencia acogerlas como se ha pedido, con expresa condenación en costas.

TERCERO: que a folio 22, con fecha 11 de agosto de 2021, se declaró admisibles las excepciones opuestas y se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos pertinentes, substanciales y controvertidos que allí constan.

CUARTO: que a folio 38, se cita a las partes a oír sentencia.

Con lo relacionado y CONSIDERANDO.

QUINTO: que a folio 1, comparece la parte demandante y solicita tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva en contra de doña CLAUDIA AMÉRICA JORQUERA TAPIA, ya individualizada, ordenando se despache en su contra mandamiento de ejecución y embargo por un total de \$4.884.621.- (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos), más los intereses



convenidos, declarando en definitiva que se debe continuar adelante con la ejecución hasta hacer a su representado entero y cumplido pago del total de lo adeudado, con costas.

SEXTO: que, a folio 15, con fecha 03 de mayo de 2021, comparece la abogada de la parte ejecutante, quien respetuosamente viene en hacer presente las siguientes circunstancias de hecho y de derecho:

1.- EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 464 N°14 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, "LA NULIDAD DE LA OBLIGACIÓN".

Señala que la demandada opone esta excepción atendida la supuesta nulidad de la obligación porque según ella, la firma del suscriptor no habría sido autorizada ante un Notario Público, toda vez que el Notario, no estuvo presente al momento de ser suscrito el pagaré que funda la solicitud.

Antes que todo, se debe indicar que como consta en estos autos, la autorización notarial se encuentra redactada en términos que cumplen cabalmente con los requisitos legales, así como el estándar que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en circunstancias que el título ejecutivo que es objeto de cobro lo señala de manera literal.

Sostiene que ante este estado de cosas resultará esclarecedor citar la sentencia de casación rol de ingreso N° 12.716-2011, causa en la que el ejecutado pretendía eximirse del pago, aduciendo que la firma aparecía autorizada por un notario público, pero que dicha autorización sería absolutamente irregular en cuanto no fue firmada en presencia del Notario, lo que en definitiva determina que carezca de mérito ejecutivo por no estar efectivamente en la situación prevista en el numeral 4° del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Respecto de ello, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia resolvió:

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



Que de conformidad con el artículo 434 N° 4 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, el pagaré a la orden respecto del obligado "cuya firma aparezca autorizada por un notario". Si bien de su sola lectura surge con claridad que la conducta exigida al notario es la de "autorizar", la dificultad que aquí se plantea radica en saber si esa acción exige o no la presencia ante él del obligado que firma el pagaré o de algún equivalente que objetivamente demuestre la plena identidad entre aquel a quien se atribuye la obligación, por una parte, y quien suscribe, por la otra. (Considerando 6° del fallo de casación 12.716-2011 del 30 de Enero de 2012)

Que, el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales establece las funciones de los notarios, entre las cuales la de su numeral 10°, consistente en "Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste". Esa función específica está particularizada en el artículo 425 de idéntica legislación, donde se reitera que "Los Notarios podrán autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, siempre que den fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes. (Considerando 9° del fallo de casación 12.716-2011 del 30 de Enero de 2012)

Que como se ve, la fuente normativa se abre a la existencia, en la práctica, de dos modalidades de autorización: con la presencia o sin la presencia del notario. De no darse el contacto real, material o físico entre ministro de fe y firmante, ése igualmente está en situación de autorizar la firma, siempre que le conste la autenticidad de la misma o que dé fe del conocimiento o de la identidad del signatario. Estos preceptos no dejan dudas en cuanto a que forma parte legítima del trabajo de los notarios públicos el autorizar firmas de personas cuya identidad y autoría de la rúbrica les consta, en ausencia de ellas



(Considerando 10º del fallo de casación 12.716-2011 del 30 de Enero de 2012).

Indica que en la misma línea de lo anterior, la Corte fue aún más clara al señalar igualmente en sede de casación causa rol de ingreso N° 3752-2012, citando un fallo de la misma Corte, en la causa rol N° 7321-2011, en donde se precisa que:

Es útil tener en consideración que respecto a la función a que hace referencia el numeral 10º del artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste, es menester reflexionar que lo pretendido por el legislador al efecto, al otorgar dicha facultad a estos funcionarios, ha sido sin lugar a dudas el procurar otorgar a este tipo de instrumentos la Fe del Conocimiento, esto es, la verdad que ofrece el notario, o en otras palabras, certeza, manifestada mediante su certificación de que el compareciente o comparecientes suscribieron el documento en su presencia o teniendo la completa convicción de que el suscriptor es él, porque fue identificado sin lugar a dudas.

Conforme con el considerando transcrito, el Notario Público es un ministro de fe que, al autorizar una firma puesta en un instrumento privado, da fe de conocer la firma del autorizante. En razón de ello, la ley permite al ejecutante considerar como título ejecutivo el instrumento que se presenta a cobro. Por lo mismo, no tiene sentido exigir, que el notario dé cuenta en la misma autorización de cómo le consta la autenticidad de la firma, si ya se ha identificado al suscriptor. (Considerando 3º de la sentencia causa rol de ingreso n° **3752-2012**)

Fallo en el que concluye que:

(La) sola declaración notarial de que se autoriza la firma, luego de haberse identificado al suscriptor, es suficiente para entender cumplida la exigencia que impone el artículo 425 del Código Orgánico de



Tribunales. De la condición de ministro de fe del notario autorizante se desprende que, al autorizar la firma, está dando fe del conocimiento o identidad de la persona que suscribe. (Considerando 5º de la sentencia causa rol de ingreso nº 3752-2012).

Sostiene que así puestas las cosas, y pudiendo aun destacar que en este último fallo la Corte Suprema expresó que “en el evento de que el ejecutado tuviera razón, y la firma puesta en el pagaré no fuera la suya, pudo perfectamente formular esta defensa por vía de excepción en el juicio, lo que no hizo, asilándose en cambio en una cuestión formal, que no ha acreditado”, consideración radicalmente relevante para el caso de marras se ha señalado que el pagaré habría sido firmado en blanco, y por otro lado se ha objetado el documento redundando en los mismos argumentos expuestos, por lo que fácticamente no se aporta nada que haga posible acoger ni la excepción, ni la objeción.

En conclusión, como fluye de todo lo expuesto, y parafraseando a la Excelentísima Corte de Justicia en el octavo considerando de la sentencia 12716-2011, no es precisamente la sensación de mayor o menor desconfianza popular en determinados cometidos públicos la que haya de servir de parámetro, sino que se debe buscar en el ordenamiento alguna luz que conduzca a que se verifique la ejecutividad de un documento de aquellos a que se refiere el artículo 434 N° 4º inciso segundo, luz que en ningún caso hace indispensable que el obligado lo rubrique en presencia física del notario ni que este deje en él estampadas las razones en base de las cuales da fe de la identidad.

2.- LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 464 NÚMERO 11º DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTO ES “LA CONCESIÓN DE ESPERAS O LA PRORROGA DEL PLAZO”.

Por otro lado, la contraria señala que la demandante habría



concedido prórrogas o esperas, cuestión que debe ser desechada de plano por ser afirmaciones completamente inatinentes. En primer lugar, es del caso considerar que su representada ha procedido a instruir la ejecución forzada del crédito adeudado, justamente porque no se han acordado ni prórrogas ni esperas. Como antecedente, el demandado no funda su excepción en ningún documento que así lo demuestre.

En este sentido, se debe recordar que la concesión de esperas, es una facultad del acreedor que no es posible imponerle, ya que según señala el artículo 1591 del Código Civil: “El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales”. Por otra parte, el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, referente al cumplimiento incidental, señala que “En el caso del artículo anterior la parte vencida solo podrá oponerse alegando algunas de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión de la misma, concesión de esperas o prórrogas del plazo; novación, compensación, transacción, la de haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto en el artículo anterior, la sentencia que se trata de cumplir, la del artículo 464 número 15 y la del artículo 534, siempre que ellas, salvo las dos últimas, se funden en antecedentes escritos....”, de manera tal que, de una interpretación armónica de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil se sigue necesariamente que lo señalado en este precepto es también aplicable al procedimiento ejecutivo en cuanto a que la concesión de esperas por parte del acreedor debe constar por escrito, ya que de otra forma se hace muy difícil su prueba en juicio, por lo que, en definitiva, esta excepción, debe ser rechazada con costas.

Culmina solicitando que en mérito de los preceptos legales



citados, así como de la doctrina y la jurisprudencia referidas, se sirva tener presente lo expuesto, para todos los efectos legales.

SÉPTIMO: que la parte ejecutante acompañó digitalmente a la causa los siguientes documentos:

A folio 1: - Copia autorizada de poder especial de BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE

OPERACIONES S.A. a esta compareciente, otorgada en la notaria de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, con fecha 13 de agosto de 2019 e incorporada a su repertorio N° 5854-2019.

- Pagaré N°007689, singularizado en lo principal, que se encuentra en custodia del Tribunal bajo el número 1377-2020.

OCTAVO: que la parte ejecutada presentó los siguientes medios de prueba:

A folio 30: documentos acompañados digitalmente.

-Modelo a facturar emitido por British American Tobacco Chile Operaciones S.A., respecto de Jorquera Tapia, Claudia América, por un total a pagar por la suma de \$5.912.754.

- Factura electrónica N° 6, Rut 12.544.386-9, emitida por Claudia América Jorquera Tapia, para British American Tobacco Chile Operaciones S.A. de fecha 07 de agosto de 2019, por un total de \$5.912.754.- relacionada con el modelo a facturar acompañado en el numeral primero que antecede.

- Factura electrónica N° 5, Rut 12.544.386-9, emitida por Claudia América Jorquera Tapia, para British American Tobacco Chile Operaciones S.A. de fecha 29 de agosto de 2019, por un total de \$1.107.351.-

- Informe de movimientos largo plazo de fecha 05 de agosto de 2019, por un saldo final \$3.242.729,97.-

- Movimiento cuenta corriente de fecha 12 de diciembre de 2019 emitido por British American Tobacco Chile Operaciones S.A., cosechero

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



Jorquera Tapia Claudia América, cosecha 2018/2019, por un saldo de \$1.952.198,53.-

-Factura electrónica N° 34023, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 31-07-2018, por un total \$409.020.-

-Factura electrónica N° 34845, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 31-10-018, por un total \$604.092.-

-Factura electrónica N° 36915, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 30-11-2018, por un total \$903.962.-

- Factura electrónica N° 37296, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 31-12-2018, por un total \$382.368.-

- Factura electrónica N° 2845, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 30-01-2019, por un total \$116.513.-

- Factura electrónica N° 37652, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 31-01-2019, por un total \$58.659.-

- Factura electrónica N° 38024, emitida por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. Rut 90.286.000-2, a Jorquera Tapia, Claudia América, fecha de emisión 31-03-2019, por un total \$21.268.-

A folio 31: rola acta de audiencia de prueba testimonial, en donde constan las declaraciones de doña Nicol Villagra Urrutia y Hugo Castillo Fuentealba.

A folio 38: consta diligencia de absolución de posiciones solicitada por la parte demandada, la que no obstante haberse citado a oír sentencia se encuentra fijada para el día 03 de enero de 2022, y de la cual se

Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416, Linares
Teléfono de Contacto: 952165107



prescindirá para efectos de dictar el presente fallo, atendido el estado procesal de esta causa.

NOVENO: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde al demandado probar la extinción de una obligación o la concurrencia de alguna ineficacia del acto jurídico que da origen a la acción intentada en esta causa.

Siguiendo con esta idea y respecto de la nulidad de la obligación alegada por la parte ejecutada, en cuanto a su primer capítulo, diremos que está orientada a atacar la actual exigibilidad del título que se presenta a cobro. De este modo el pagaré de marras debería acceder a un contrato de suministro, u otro análogo, entre las partes, en el cual previo a generar estados de pago deberían ejecutarse operaciones destinadas a determinar los alcances que a favor de uno y otro se producen en esta suerte de convención de siembra y cosecha de tabaco.

En este especial aspecto de intento de causación del pagaré diremos que, en primer lugar, es en el mismo instrumento que se ataca en donde debería constar esta causación, cosa que no ocurre del examen del mismo, el cual está extendido de manera simple, sin anexos ni constancias que lo remitan a otra convención entre las partes.

Así las cosas, la principal obligación del ejecutado, en este acápite, es acreditar por medio de prueba legal la existencia del contrato al cual accede el pagaré, de modo tal que sea apreciable si hay aspectos sobre su exigibilidad que deban ser revisados judicialmente, cosa que no ha ocurrido en la especie, ya que el contrato mismo no obra en la causa. Resulta evidente que lo que se acompañó documentalmente son copias de movimientos bancarios y facturas que podrían dar luces respecto de un principio de prueba por escrito respecto del citado contrato, sin embargo la ausencia del referido instrumento resulta insalvable para efectos de determinar de qué manera accedería el presente pagaré a



dicha convención, cuestión que tampoco suple la testimonial rendida en autos por la demandada, en primer lugar por la proscripción de probar obligaciones sobre las 2 UTM sólo con testigos, sino que además por el hecho de que doña Nicol Villagra Urrutia, al afirmar que la obligación es “nula” por estimar que concurre un cobro excesivo, no da mayor razón de sus dichos más allá de señalar haber trabajado para la demandada y conocer el negocio tabacalero por más de tres años, situación que se presenta de igual forma respecto de lo declarado por don Hugo Castillo Fuentealba, consecuentemente la actual exigibilidad del pagaré se presenta en forma clara por quien lo cobra y no se han allegados medios de prueba idóneos que acrediten algo en contrario.

En cuanto al segundo acápite de nulidad, diremos que efectivamente consta en la causa que el pagaré presentado a cobro ejecutivo, acompañado a folio 1, contiene la firma del suscriptor u obligado al pago y dicha firma aparece autorizada por un Notario Público, según consta en la hoja 2 del instrumento, situación que se verificó por el mérito del estampado de la impresión digito pulgar del firmante, cuestión que opera plenamente dentro de las facultades legales y reglamentarias de todo Notario Público, y una vez más, sin que exista prueba en contrario.

Finalmente la concesión de esperas o prórrogas, que también afectarían la exigibilidad del instrumento, fue absolutamente negada por parte de la ejecutante y no obra en autos prueba que contradiga esta posición.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil, y artículos 144, 160, 170, y 464 N°11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN, íntegramente las excepciones opuestas por la parte ejecutada, a folio 13 de autos.



II.- Que, en consecuencia **SE HACE LUGAR** a la demanda ejecutiva, interpuesta en lo principal del escrito de folio 1, por **BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A.**, en contra de doña **CLAUDIA AMÉRICA JORQUERA TAPIA**, ya individualizados, y se ordena seguir adelante con la ejecución, hasta hacer pago al acreedor de la suma de \$4.884.621.-, por concepto de capital adeudado, más intereses pactados, deuda que emana del pagaré N°007689, suscrito a su orden, por la ejecutada.

III.- Que **SE CONDENA** en costas a la ejecutada, por haber resultado totalmente vencido.

Notifíquese, regístrese, dese copia autorizada a la parte que lo solicite y archívese en su oportunidad.

Rol C-1654-2020

Dictó, don **ALEJANDRO ANTONIO SUMONTE VERDEJO**,
Juez.-



Ignacio Carrera Pinto N° 97, Parral.-

Maipú N° 461, Edificio Salman, 4° Piso, oficina 416,
Teléfono de Contacto: 952165107

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>